

Editorial

Educación, reforma económica y cambio social: sus perspectivas en México

INTRODUCCIÓN

Una preocupación constante del Centro de Estudios Educativos (CEE) ha sido investigar las relaciones entre el sistema educativo y el sistema social global. Ante una realidad como la de nuestro país, en donde el sistema educativo se encuentra cumpliendo una función de refuerzo de la estructura social, resulta de especial interés la búsqueda de fórmulas mediante las cuales la educación pueda colaborar a modificar las pautas de distribución de los beneficios sociales y las oportunidades de participación.

La evolución del pensamiento del CEE a este respecto puede seguirse en los editoriales de números anteriores de esta Revista. En el III-3 se hizo una presentación provisional de los resultados de varios años de investigación y reflexión sobre este particular. Dichos resultados fueron después sometidos a un examen más riguroso, tanto de parte del personal del Centro como de especialistas externos que fueron consultados *ex professo*. Se llegó a la conclusión de que era necesario revisar determinadas fases del análisis que se había efectuado y reformular algunas de las conclusiones obtenidas. Muy especialmente se necesitaba lograr una mayor coherencia entre el diagnóstico que se hacía de la situación política de México, la teoría de cambio social que se proponía como adecuada a la situación del país y las consecuentes recomendaciones de reforma educativa. A continuación se resume el desarrollo de un análisis que ha pretendido tomar en cuenta estos requerimientos.

Se describen, en primer lugar, los factores que determinan la función que ha venido desempeñando el sistema educativo del país. En seguida se intenta prever la forma en que podrían repercutir sobre estos factores las modificaciones que se ha tratado de hacer en la política económica que se había venido siguiendo desde los años cuarenta.

Asimismo, se hace notar que los esfuerzos que se hagan en este sentido podrán redundar efectivamente en una modificación de las pautas conforme a las cuales se distribuyen en México el bienestar y las oportunidades sociales, así como también la posibilidad de que —si estos cambios son apoyados por una serie de reformas en el sistema educativo nacional— faciliten el que la educación contribuya a un cambio socioeconómico más amplio.

Se señalará después que de esta reforma en la política oficial del gobierno no puede esperarse una ampliación significativa de las oportunidades de participación política, como tampoco un cambio sustancial en los valores que orientan las relaciones sociales entre hombres y grupos.

Es necesario, por tanto, pensar en la necesidad de una labor educativa realizada al margen y paralelamente a las actividades del sector oficial, por grupos y educadores independientes que se propongan como objetivos —a largo plazo, desde luego— cambios gestados por las mayorías, cuyos efectos resulten más permanentes. Aunque estos grupos deberán seguir sus propios métodos y utilizar instrumentos y material de apoyo específicamente desarrollados para su labor educativa y promocional, apuntamos algunos elementos que se deducen de la nueva tendencia oficial que pueden ser aprovechados positivamente por ellos.

No intentamos con esto proporcionar un programa de índole educativa ni para el sector oficial ni para los grupos independientes. Pretendemos simplemente mostrar ciertas líneas de posible acción educativa para ambos sectores, con base en un diagnóstico de la realidad actual del país y en una extrapolación a corto plazo de las nuevas tendencias.

Relación entre educación y estructura social

La expansión de la matrícula escolar en los últimos años no tiene precedentes. Varios estudios publicados en los últimos años han revelado que desde 1958 la matrícula total ha crecido más rápidamente que la población demandante, por lo cual los índices de satisfacción de la demanda potencial han mejorado sustancialmente. El país ha logrado elevar los niveles educativos de las nuevas generaciones con respecto a los que alcanzaron las generaciones anteriores.

Sin embargo, los beneficios de esta expansión no han sido iguales para todos los sectores de la sociedad, sino que han resultado especialmente beneficiados:

- los habitantes de zonas urbanas respecto a los que viven en áreas rurales;
- dentro de las zonas rurales, los que viven en localidades de más de mil habitantes respecto a los que habitan en comunidades más pequeñas;
- los habitantes de las regiones sociogeográficas de mayor desarrollo, respecto a los que habitan en las regiones más deprimidas;
- los hijos de quienes disfrutaban de una posición social mejor, de ingresos más altos, etc., respecto a quienes pertenecen a estratos sociales inferiores.

La distribución desigual de las oportunidades educativas no sólo se da en el acceso al sistema escolar, sino también en el aprovechamiento y la permanencia en la escuela. Se ha comprobado que las posibilidades de reprobar y tener que abandonar los estudios son mayores para quienes proceden de estratos inferiores. Esto se debe fundamentalmente a motivos socioeconómicos, entre

los que se encuentran la mala nutrición de los educandos y la necesidad de que los padres de familia se sirvan de sus hijos como mano de obra en vez de enviarlos a la escuela.

Los efectos de la escolaridad sobre la ocupación y el ingreso tampoco son los mismos para todos los sectores sociales que componen el contingente de egresados del sistema educativo. La causa es que el mercado de trabajo no ha sido capaz de crear el número necesario de plazas que absorban a las personas que egresan del sistema escolar. El desajuste estructural entre el desarrollo del mercado de trabajo y el aumento del egreso escolar es la razón por la que los individuos cuyo nivel de escolaridad es inferior cuentan con menores posibilidades de obtener empleo. Tengamos además en cuenta que éstos proceden de las clases sociales más desfavorecidas y que son los más numerosos.

Ante el exceso de personas que buscan trabajo, fundamentalmente egresados de los niveles inferiores del sistema escolar, los empleadores han disminuido la demanda de trabajo poco calificado al elevar artificialmente los requisitos escolares necesarios para desempeñar aun los puestos de menor complejidad. Esto agrava el problema, pues reduce todavía más las oportunidades de empleo para los sectores mayoritarios de la población.

De lo anterior se sigue que los grupos sociales que a últimas fechas han logrado acceso a la educación posprimaria tienen que aceptar posiciones y salarios que anteriormente correspondían a individuos que habían alcanzado niveles más bajos de educación formal. Por su parte, los individuos procedentes de los estratos inferiores que recientemente han tenido oportunidad de cursar algunos grados de educación primaria, ya no logran obtener en el mercado de trabajo los puestos que anteriormente habían desempeñado quienes tenían esa misma educación formal, y por tanto quedan relegados al desempleo o al subempleo.

Entre los que han cursado niveles de educación superior, se observa la existencia de una élite que logra aumentar sus ingresos promedio a una velocidad mayor que los integrantes de los demás grupos que han cursado los mismos estudios. Esto significa que la misma educación tiene un valor diferente en el mercado de trabajo, que depende de determinadas ventajas de que ya gozan ciertos grupos e individuos (*v. gr.*, *status* social, posición económica, etcétera).

Estos hechos refutan la tesis de que una movilidad educativa intergeneracional provoca una distribución más justa del ingreso y del bienestar general, tesis que por otra parte se ha convertido en esperanza para grandes sectores de la población.

Determinantes de la relación entre educación y estructura social

No podían esperarse efectos diferentes de un sistema educativo como el de México, que se encuentra inserto en un contexto de distribución injusta de todo tipo de beneficios, bienes y servicios. Lo que impide que el sistema educativo actúe como instrumento nivelador de las diferencias sociales, son los cuellos de botella originados, como resulta evidente, por factores que se hallan fuera del ámbito de acción y control del mismo sistema educativo.

Tales factores son producto del modelo de desarrollo que ha adoptado el país, el cual, al dar preferencia a una rápida industrialización que imita modelos de naciones desarrolladas, se encuentra desadaptado respecto a las necesidades nacionales.

Las características de este modelo de desarrollo son de todos conocidas. Por tanto, sólo cabe mencionar aquí la preferencia por inversiones destinadas a producir bienes intensivos de capital sobre las que implican un mayor uso de mano de obra, la consecuente dependencia económica del exterior, la producción de artículos suntuarios... Esto ha provocado la polarización de la economía en dos grandes sectores: uno moderno, minoritario, que disfruta de todos los beneficios propios de un país altamente industrializado, y otro, tradicional, rezagado y al margen de los beneficios que se esperarían del aparente desarrollo nacional. Más específicamente, esta situación ha provocado entre otras cosas:

- El estancamiento del sector agrícola tradicional, al que pertenece alrededor del 40% de la población. Como consecuencia, una gran parte de los habitantes de nuestro país se mantiene a niveles de subsistencia e infrasubsistencia, sin disfrutar de una buena parte de los bienes y servicios que produce el país. Tal situación determina por sí misma las condiciones del acceso al sistema escolar, de la permanencia en el mismo y del aprovechamiento.
- El desempleo —manifiesto u oculto— creciente, que ha alcanzado ya niveles alarmantes.
- La estrechez del mercado de consumo interno.
- Una distribución asimétrica del ingreso que, por una parte, desalienta la producción de bienes básicos, cuya generación es compatible, en condiciones de eficiencia, con el uso intensivo de la mano de obra y, por otra, ofrece incentivos para producir bienes de tecnología intensiva de capital, que sólo pueden ser consumidos por los sectores minoritarios del país.

El caso mexicano, como tantos otros, ha demostrado la invalidez de la tesis que sostiene que el desarrollo industrial tarde o temprano derramará sus beneficios sobre los grupos sociales ahora desposeídos. Se ha comprobado, por el contrario, que dentro de un contexto de desarrollo industrial dependiente —con las consecuencias de polarización creciente de la sociedad y de estancamiento económico— no puede esperarse la incorporación gradual de toda la población al usufructo de los beneficios del desarrollo, sino más bien la agudización de las diferencias.

Ante una situación económica y social injusta y que se ha venido agravando, puede uno preguntarse cómo se ha podido mantener en el país el clima de paz social y la estabilidad política durante tantos años.

La respuesta parece encontrarse en el papel que ha desempeñado el sistema político durante este periodo. La mancuerna que forman el Partido oficial y el gobierno ha resultado una fórmula eficaz para impedir que la inconformidad derivada de esta situación desemboque en conflictos que pongan en peligro la estabilidad y permanencia del sistema. Esto se ha logrado gracias a la utilización premeditada de una serie de mecanismos, entre los cuales pueden mencionarse:

- El reparto oportuno de beneficios sociales que acallan temporalmente las demandas de sectores importantes de la población. El aparato político ha sido capaz de prever con tiempo suficiente posibles gérmenes de enfrentamiento y conflictos sociales, y de atender con beneficios concretos (escuelas, vivienda, crédito...) a los sectores involucrados de la población.
- La división interna de sectores desfavorecidos. Este mecanismo se ha traducido en el reparto de oportunidades de participación política entre los líderes potenciales, sobre todo de los sectores campesino y obrero. La consecuencia ha sido el descabezamiento oportuno de movimientos populares laterales y un desclasamiento de sus líderes.
- La cooptación de la disidencia abierta y de las organizaciones populares independientes. El aparato político ha logrado incorporar a un buen número de disidentes y críticos del actual sistema, bien al Partido, bien a puestos públicos disponibles o creados artificialmente. De la misma manera, el partido oficial ha hecho entrar a sus filas a un número considerable de organizaciones otrora independientes, que podrían haberse constituido en forma autónoma, con el fin de reducir las amenazas organizadas a la hegemonía política actual.
- La represión. El aparato político se ha servido de este mecanismo sólo como último recurso y en grado mínimo, gracias a la capacidad de previsión que dicho aparato ha demostrado tener.

Todos estos mecanismos se han conjugado de tal manera que ha sido posible no sólo mantener el estado de cosas, sino, en algunos aspectos, incluso fortalecerlo.

Tendencias recientes de reorientación de la política oficial

No obstante lo anterior, desde 1968 se empezó a perfilar un inicio de rompimiento de este sistema político. El movimiento estudiantil que tuvo lugar ese año, por su magnitud y por el momento especial que vivía el país, puso en evidencia la incapacidad del sistema de controlar la oposición. El aparato político se vio forzado a utilizar la represión abierta, a pesar de las repercusiones que esta medida podía tener.

A partir de esta fecha puede observarse un cambio en la tendencia económica del país, que responde a la inclinación de quienes toman las decisiones hacia una política populista, que pregona la distribución más justa de los beneficios sociales. Tal cosa obedece sin duda a una percepción clara de que estas medidas son necesarias para asegurar que una determinada élite se mantenga en el poder. La nueva tendencia redistributiva podría sintetizarse en el término: "desarrollo compartido", que es frecuentemente mencionado en las fuentes oficiales.

La política de "desarrollo compartido", si pudiera llamarse tal, se ha traducido en los últimos seis años de gobierno en acciones como las siguientes: aumento considerable del apoyo económico y técnico al sector rural, aumento de la inversión pública en actividades de interés social, y la creación de nuevas instituciones de beneficio popular (tales como INFONAVIT, FONACOT, etcétera).

Sin embargo, estas acciones se han tenido que implementar mediante una política de gasto público deficitario. Consecuentemente, el aumento de la demanda de algunos productos, resultado de estas medidas (sin la concomitante restricción del consumo de los sectores privilegiados) ha causado un aumento de precios, que limita forzosamente el consumo de las clases más desposeídas. La consecuencia ha sido que se han distribuido beneficios entre aquellos grupos sociales que tienen capacidad de presión política (obreros y campesinos organizados), a costa de los sectores más desfavorecidos. Es evidente que esa forma de financiar una política populista tiene límites próximos.

El presente régimen se ha caracterizado también por el aumento notable que ha otorgado a la libertad de expresión, sobre todo escrita, y por la utilización de un lenguaje de avanzada por parte de quienes ocupan altos puestos públicos. Esto crea la imagen de que en el país existen oportunidades cada vez mayores de participación y de que, según se puede juzgar por el lenguaje, el gobierno tiene una tendencia marcadamente izquierdista.

De todo lo anterior puede deducirse al menos el propósito de una mayor redistribución. Sin embargo, también queda claro que esta serie de medidas no ha obedecido a una planificación rigurosa, sino que ha seguido más bien un patrón un tanto anárquico, que no ha permitido llegar a resultados profundos. Tal cosa es explicable si recordamos que quien ha tomado esas decisiones ha sido la clase en el poder con el intento de evitar una total ruptura con el *statu quo*.

No obstante, es innegable que los efectos redistributivos de este tipo de medidas son en sí positivos. Por tanto, caben las preguntas:

¿Hasta dónde puede llegar una política oficial de tal naturaleza si se lleva a cabo con una orientación clara y sistemática? ¿Qué acciones serían necesarias para asegurar esta sistematización y dirección?

Previsión de tendencias a corto plazo

Aparece claramente que se persigue la distribución más justa del bienestar económico y social entre todos los sectores de la población, si bien esto puede significar, para quienes toman las decisiones, no un objetivo último sino un instrumento para mantenerse en el poder.

Es evidente que para lograr tal objetivo no bastará aumentar el volumen del ahorro interno para acelerar el ritmo de desarrollo mediante un incremento en la inversión, ni atenuar el ritmo de crecimiento demográfico para aligerar la presión de la demanda sobre los servicios sociales y reducir la oferta de trabajo; tampoco bastará adecuar mejor la educación, en términos cualitativos a los requerimientos de personal por parte de la economía, ni elevar el nivel de capacitación de la mano de obra. Todas estas medidas —por sí solas— tenderían más bien a reforzar o a estabilizar el modelo de desarrollo que el país ha venido siguiendo hasta ahora.

La tendencia hacia la redistribución que parte de una decisión política sólo podrá lograrse cuando las medidas que acaban de citarse formen parte de un proceso tendiente a reorientar el funcionamiento de la economía

hacia otras pautas que requieran una mayor utilización relativa de recursos humanos. Esto implicaría alterar los criterios de distribución de los recursos públicos y privados a fin de difundir el progreso técnico entre la totalidad de los sectores de la economía; ampliar el mercado interno; homogeneizar gradualmente el sistema económico, y lograr una mayor capacidad de autosustentación en el proceso de desarrollo respecto a las influencias o determinaciones exteriores.

Habrà también que orientar el desarrollo de la industria para que el llamado sector moderno de la economía cumpla su función de transformar la totalidad del sistema combatiendo directamente el problema de la marginación económica y social, en lugar de esperar que esto ocurra como un efecto indirecto de la política actual.

Es necesario, pues, canalizar importantes volúmenes de recursos hacia los sectores rezagados de la economía, procurando acrecentar la productividad y el ingreso de las actividades en las que se ocupa la mayor parte de la población económicamente activa. Al mismo tiempo, habrá que adoptar una política muy selectiva en la expansión del sector moderno para modificar la estructura productiva, de tal modo que dicho sector deje de ser esencialmente un elemento productor de bienes de consumo y genere, sobre todo, los bienes de capital y los productos intermedios que son necesarios para desarrollar la economía en su conjunto.

Una política de esta naturaleza tendría también importantes implicaciones en la distribución regional de la actividad económica, pues implicaría descentralizar las inversiones desde los puntos de vista espacial y sectorial. De este modo, se sustituiría el modelo de crecimiento que hasta ahora se ha apoyado en la diversificación de la demanda, por otro que se basaría en la ampliación de la misma, para responder a los incrementos en la capacidad de compra de la población marginada, mitigar las presiones sobre la balanza de pagos y mejorar la distribución del ingreso. Así, la estructura industrial tendería a equilibrar mejor la producción de bienes de capital e intermedios y facilitaría la transformación gradual de los sectores rezagados, atenuando las presiones sobre el mercado de trabajo.

Es importante subrayar que una estrategia como la descrita de ningún modo significará detener el avance tecnológico de los sectores dinámicos de la economía; por el contrario, se procuraría mejorar la productividad en todos los sectores económicos mediante la adopción de tecnologías eficientes, al evitar el desarrollo de sistemas productivos que de ninguna manera responden a las condiciones reales de la economía del país.

Es necesario subrayar que una reorientación de este tipo propicia una modificación sustancial en la estructura de la demanda agregada. En efecto, la estructura actual de dicha demanda exige que se utilicen tecnologías altamente intensivas de capital para generar los satisfactores que, más allá de los de primera necesidad, demandan las minorías que disfrutan de la mayor parte del ingreso nacional. En cambio, la demanda de bienes básicos cuya producción es compatible, en condiciones de eficiencia, con la utilización de tecnologías

menos intensivas de capital es relativamente débil, ya que la mayoría de la población —que podría generar un mercado interno más amplio— carece de posibilidades de adquirir estos productos.

Ahora bien, como la estructura de la demanda agregada depende a su vez de la distribución del ingreso, la utilización de mano de obra irá aumentando en la medida en que el ingreso nacional se vaya distribuyendo menos inequitativamente.

Para lo anterior, sería necesario seguir aprovechando los recursos que proporcionan las políticas tributaria y de gasto público. Éstas, sin embargo, tienen fuertes limitaciones, dados los pocos causantes sobre quienes recaería una reforma fiscal profunda y las posibles consecuencias de desaliento a la inversión de capital privado. Es por tanto necesario ir más allá. Se hace indispensable la creación de las estructuras sociales que permitan esta nueva estrategia de desarrollo, y que ésta se apoye en las capacidades y los recursos de que disponen los sectores de la población que han resultado favorecidos por el actual modelo económico. Puede pensarse, por ejemplo, en mejorar las condiciones económicas y sociales del sector agrícola mediante el aprovechamiento del talento de los profesionistas y científicos, del capital privado, de los recursos del Estado y del poder organizativo de los campesinos; puede pensarse también en rescatar de sus actuales condiciones a los integrantes de los sectores pauperizados de las ciudades y del campo por medio del establecimiento de empresas de propiedad social que generen productos agroindustriales de primera necesidad, y que proporcionen trabajo a quienes actualmente se encuentran subempleados.

Es evidente que la mayor parte de los recursos que financiaran estos ensayos tendrán que provenir del Estado y de las empresas que forman el sector moderno de la economía.

No se desconocen las dificultades a que se enfrenta la iniciación, el desarrollo y la consolidación de un proceso como éste. Sin embargo, sólo una política que adopte decididamente este tipo de medidas podrá prometer resolver, en alguna medida, la problemática social connatural al modelo de desarrollo vigente en el país. Sólo de esta manera el tan proclamado “desarrollo compartido” podrá lograr los efectos que de él se esperan.

Posibles implicaciones educativas del “desarrollo compartido”

En lo que respecta a las actividades del sistema educativo, puede esperarse que dentro de esta tendencia reformista gubernamental ocurra en un futuro próximo una mayor expansión de la enseñanza básica. Es ya un hecho el Plan Nacional de Educación de Adultos que ofrece, por primera vez, una educación básica y media especialmente preparada para adultos y adaptable a sus circunstancias especiales de aprendizaje.

Medidas de esta naturaleza cumplen la importante función ideológica de legitimar ante las mayorías una serie de supuestos falsos de bienestar y posibilidades de movilidad social. Sin embargo, es de temer que la mera expansión de estos niveles educativos tendrá los mismos aspectos y ocasionará los mismos problemas que hasta la fecha. Es decir, mientras el mercado de trabajo no

pueda crecer al mismo ritmo que el número de egresados de estos niveles de escolaridad, pronto llegará el momento en que el sistema educativo no pueda ya cumplir la función legitimadora que hasta la fecha ha desempeñado ni rendir los efectos que de ésta se esperan. La expansión educativa misma resultará contraproducente para el régimen al dejar de cumplir esa función legitimadora.

Es imposible predecir la clase de medidas que puedan tomar las élites políticas en su intento de solucionar los problemas sociales y de mantenerse en el poder. Sin embargo, sería de esperar que un esfuerzo sistemático de reforma del sistema económico fuese acompañado de un proyecto de reforma educativa. El fin de ésta sería preparar y apoyar la reforma del sistema económico y prever sus requisitos futuros por lo que respecta a los recursos humanos y a la tecnología.

Así pues, puede preverse que el gobierno tomará las siguientes medidas de índole educativa:

a) Para preparar la reforma económica:

- Cambiar los enfoques de las carreras medias superiores y superiores, de manera que se orienten hacia la creación del personal necesario (administrativo, técnico, etc.) para el manejo de una economía que ponga un énfasis mayor en el empleo de tecnologías dirigidas a la producción de artículos de consumo popular y uso de obra.
- Cambiar los enfoques de la enseñanza primaria, media y sobre todo técnica, dirigida a futuros obreros y empleados.

b) Para apoyar

- Diversificar y multiplicar programas de capacitación campesina, así como proyectos de colectivización ejidal y de aumento de la productividad agrícola.
- Enfatizar aún más la capacitación laboral a través de sindicatos afiliados al Partido, para asegurar una presión obrera manejable en la línea de las reformas planeadas por el gobierno.
- Aumentar las actividades educativas tendientes a descentralizar la actividad económica de los grandes monopolios y de las grandes urbes: capacitación para el manejo de empresas agroindustriales.
- Prestar mayor atención y estructurar mejor el servicio social de los universitarios, para asegurar un apoyo técnico eficaz y de bajo costo a este tipo de actividades.

c) A fin de ir preparando los recursos necesarios para las demandas que vaya planteando el desarrollo de estas reformas, serían necesarias:

- La expansión de los niveles básico y medio correspondiente a la expansión de las oportunidades de empleo. Esto podría deducirse como una medida lógica de preparación gradual de recursos humanos, con la seguridad de que éstos logren incorporarse al mercado de trabajo. Cabe decir, sin embargo, que una expansión armónica y gradual como la aquí prevista es sin duda políticamente inviable, dado el desajuste

crónico entre la demanda social por educación y la demanda económica por mano de obra.

- La ramificación mayor de las sólidas terminales, orientadas hacia la preparación de recursos humanos para el trabajo productivo, en los diversos niveles educativos.

Las medidas que aquí se prevén en la política oficial en las áreas de la economía y la educación, si llegaran a aplicarse en forma sistemática, aminorarían sin duda las diferencias sociales y acallarían las tensiones latentes.

No obstante, este tipo de efectos provienen de decisiones tomadas por un sistema político que por su propia seguridad no permite modificar las pautas de participación en los procesos de toma de decisiones, y mucho menos modificar los fundamentos valorales implícitos en las relaciones sociales —modificación de la cual podría esperarse un cambio en las relaciones de explotación y dominio que amenazan con perpetuar una situación de injusticia.

Una modificación en las políticas oficiales, económica y educativa, como la que arriba se esboza, no alcanza por sí sola a satisfacer los requerimientos de un cambio social deseable. En efecto, este cambio debe tender hacia una distribución más justa de las oportunidades de participación política y hacia una transformación profunda de los valores que orientan las relaciones sociales.

Esfuerzos independientes de cambio

Sólo dentro de este contexto cobran sentido los esfuerzos de grupos independientes cuyos objetivos de cambio social son más profundos y duraderos, aunque, claro está, a más largo plazo.

No pretendemos aquí ofrecer criterios y lineamientos para “un cambio social deseable”, sólo nos interesa hacer notar que este cambio tendrían que gestarlo las propias mayorías.

Es imposible predecir el rumbo que tomarán estos procesos, pero puede apuntarse que deben partir de y madurar en un proceso de organización, estructuración y vertebración social horizontal. La función de estas organizaciones es permitir que personas y grupos vivan nuevos valores de relaciones, que son esenciales para una convivencia humana más justa.

Los agentes de este tipo de esfuerzos deben ser los líderes naturales de los propios sectores desposeídos. Algunos de estos grupos, sin embargo, requieren el apoyo y el acompañamiento, al menos en un principio, de personas, grupos e instituciones independientes cuyos conocimientos, técnicas y disposiciones personales pueden contribuir a acelerar un proceso como éste.

Dada la situación social y política nacional, sólo es posible pensar en estos esfuerzos hacia el cambio con proyectos a muy largo plazo. No obstante, dentro de una perspectiva mediata, algunas de las tendencias redistributivas de los regímenes actual y próximo futuro prometen proporcionar coyunturas que pueden aprovechar quienes trabajan con miras a un cambio social más profundo para acelerarlo. Más específicamente, si el sistema político adopta

una serie de disposiciones sistemáticas de reforma en los sistemas económico y educativo, existen varios renglones que pueden aprovechar los educadores independientes cuyas intenciones rebasan los objetivos de una reforma de este tipo.

Las necesidades de los esfuerzos independientes de promoción, organización y educación popular en la dirección deseada, son muchas y muy variadas. No puede pensarse que esos esfuerzos tengan en sí los elementos de solución para los diversos tipos de problemas ni de satisfacción a las necesidades que se van gestando en el trabajo. Se hace necesario que recurran continuamente a fuentes y apoyos externos para seguir adelante en su labor.

Desde esta óptica, resultan aprovechables varias de las tendencias que pueden esperarse de los actuales regímenes. Por ejemplo, la oportunidad de certificar, los estudios en forma abierta es una buena coyuntura para formar grupos de estudio que pretendan objetivos organizacionales y valorales y para quienes la certificación llegue a constituir un objetivo secundario. Además, puede considerarse que las actividades educativas populares son tanto más efectivas cuanto más se insertan en procesos de acción económica o de integración y organización social.

En este sentido, los esfuerzos gubernamentales en torno al desarrollo productivo del agro en México proporcionan una buena oportunidad para crear organizaciones económicas solidarias de producción, ahorro y consumo con un respaldo oficial y con fuentes adicionales de apoyo técnico y de capacitación. La preocupación oficial por la descentralización de la industria ofrece también una serie de posibilidades. Cabe asimismo mencionar que en los últimos años, debido fundamentalmente a la incorporación de algunos disidentes en cargos públicos, existen en los puestos intermedios del sector público personas interesadas genuinamente por la promoción efectiva de la justicia, difícilmente corruptibles y que se encuentran dispuestos a prestar todo tipo de apoyos y asesorías a grupos independientes interesados en trabajar en esta línea. Por otra parte, el nuevo lenguaje que utilizan los altos funcionarios permite la justificación, ante la opinión pública, de muchas acciones que en épocas anteriores se hubieran visto con malos ojos.

Además, es importante notar que parecen abrirse nuevas oportunidades para que las organizaciones de educación tanto formal como no formal introduzcan modificaciones importantes en su estructuración. Con ello se podrán ir preparando —con la adecuada integración de estudio y acción— los recursos humanos necesarios para proporcionar dirección temporal y diversos tipos de asesorías (técnicas, administrativas, legales) a los intentos de organización e integración social de grupos poco privilegiados. Pueden a su vez resultar de allí experiencias interesantes que aporten ideas para instaurar reformas educativas más amplias, puesto que se insertan coyunturalmente dentro de una determinada orientación gubernamental.

Sin embargo, los grupos independientes no deberían limitar sus actividades educativas al mero aprovechamiento de las coyunturas abiertas en el sistema más amplio. Deberán hacer uso de ellas sólo como algo que les facilita, en un

momento dado, la consecución de un objetivo más amplio que ha de girar en torno a la integración social, la organización, la participación consciente y la vivencia de valores de solidaridad, responsabilidad, creatividad, etc. Deberán además seguir desarrollando los métodos y estrategias educativas que conduzcan a este tipo de procesos. Para esto se recomienda a los grupos que trabajan en este sentido que hagan, en cuanto les sea posible, el diagnóstico y la experimentación de sus actividades, ya que sólo así llegarán a acumular los conocimientos que les permitirán juzgar su viabilidad y posible eficacia.

Puede suponerse que los grupos independientes que persigan objetivos de esta índole y que aprovechen para ello algunas de las coyunturas abiertas por el sistema político y económico, irán caminando hacia el logro de cambios valorales importantes en las relaciones sociales entre sus miembros. Desgraciadamente, no puede preverse con precisión la eficacia, en términos de sus efectos externos, de la actividad de cada uno de los grupos que apunten en la dirección de un cambio social más profundo y duradero. Especialmente difícil de predecir es la influencia que sobre la estructura más amplia puedan tener estas actividades. Sin embargo, la estructuración del sistema político y económico del país permite anticipar la apertura de ciertos resquicios que permitirán la participación de pequeños grupos dentro del sistema más amplio. Esta posibilidad deberá estudiarse para cada localidad y grupo y en momentos concretos, ya que puede esperarse que a nivel macrosocial, estas acciones favorezcan una "evolución" o "transformación incrementalista" del sistema político, que a un plazo más largo sea capaz de reforzar las tendencias que parecían haber cobrado vigor a partir de 1971.

Por tanto, es necesario experimentar caminos que, en el momento en que exista la posibilidad de una acción masiva, rendirán quizá un fruto más amplio. Mientras tanto, la actividad que se realiza puede resultar útil para las localidades y grupos concretos con los que se trabaja, y puede abrigarse la esperanza de estar preparando mentalidades y estructuras básicas para un cambio social futuro.

* * * * *

Del análisis anterior, el CEE ha deducido, para el desarrollo futuro de sus investigaciones, las siguientes áreas prioritarias:

- 1) Investigación de las relaciones entre educación y sociedad a nivel macrosocial. Consideramos necesario continuar en esta línea de investigación, ya que sólo tal tipo de actividades proporciona una visión global de la forma en que se comporta y en qué se va modificando la función del sistema educativo como tal y de sus diversas modalidades, con relación al sistema económico y a la estructura social del país. Esto permite hacer críticas fundamentales al funcionamiento del sistema educativo, así como alimentar sugerencias para reformas educativas de un alcance mayor.
- 2) Evaluación y diseño de innovaciones educativas:
 - a) No formales, encaminadas básicamente a sectores y grupos marginados, con el fin tanto de elaborar paulatinamente un marco teórico para fun-

damentar las acciones que puedan sugerirse en este sentido, cuanto de perfeccionar metodologías concretas conducentes a estos objetivos.

- b) Formales, encaminadas fundamentalmente a los niveles medio y superior del sistema educativo. Esto proporcionará elementos de juicio sobre diseños experimentales para la formación del personal de apoyo a acciones promocionales de grupos independientes.
- 3) Se considera además que es conveniente enriquecer los planteamientos del CEE con las experiencias y conocimientos provenientes de los grupos independientes que implantan este tipo de actividades. Por esta razón, se plantea como una línea importante de acción en el futuro la realización de seminarios de reflexión sobre estos temas.
- 4) Por último, y dada la dispersión de los grupos independientes que trabajan en esta dirección, percibimos la necesidad de aumentar la difusión de los resultados de nuestras investigaciones y de los seminarios de reflexión.

Centro de Estudios Educativos, A. C.

